



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, veintisiete de julio de dos mil veintiuno

19-264

Proceso: **CONSULTA**
Demandante: **MARIA DEL SAGRARIO OCHOA BEDOYA**
Demandado: **COLPENSIONES**
Radicado No.: **05001-31-05-016-2016-01328-01.**
Decisión: **CONFIRMA ABSOLUCIÓN**

La Sala Tercera de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARÍSTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a revisar en el grado jurisdiccional de consulta la sentencia de primera instancia dentro del proceso de la referencia.

En los términos del poder allegado, se reconoce personería a la Doctora **ÁNGELA MARÍA SIERRA ALVANES** identificada con c.c. No. 1.017.160.002 y portadora de la T.P. No. 232.841 del C.S. de la J, para que continúe representando los intereses de Colpensiones de acuerdo a la sustitución otorgada por el Dr. **RICHARD GIOVANNY SUAREZ TORRES** en calidad de Representante Legal de la sociedad **RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S** apoderada de **COLPENSIONES**.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 expedido el 4 de junio de 2020, en consonancia con los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 22** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES

1.1 LO PRETENDIDO

Pretende la demandante que se condene a **COLPENSIONES** para que reconozca y pague la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su padre **GABRIEL ANGEL OCHOA BEDOYA**

desde el 25 de abril de 2011, los intereses moratorios, la indexación y las costas y agencias en derecho.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES EXPUSO EN SÍNTESIS LOS SIGUIENTES HECHOS:

- Que nació el 2 de noviembre de 1948, hija de GABRIEL ÁNGEL OCHOA BEDOYA y ANGELA MARIA BEDOYA
- Que su padre GABRIEL ÁNGEL OCHOA BEDOYA falleció el 25 de abril de 2011, quien ostentaba la calidad de pensionado, prestación que le fue reconocida a través de la Resolución No. 1153 de 1981.
- Que el 13 de agosto de 2014 la Junta Regional de Calificación de Invalidez le determinó una pérdida de capacidad laboral del 52.87%, teniendo en cuenta las patologías ARTROSIS BILATERAL DE RODILLAS, ESCOLIOSIS DEGENERATIVA, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, LUMBALGIA, RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTOS DE COLUMNA LUMAR Y GASTRITIS CRÓNICA, las cuales se encuentran inmersas en su historia clínica desde finales del año 2001; sin embargo la Junta le determinó con fecha de estructuración el 21 de agosto de 2013.
- Que al momento del fallecimiento de su padre dependía económicamente de él, pues este era la persona encargada de proporcionarle todo lo necesario para vivir, lo que desencadenó una total desprotección después del fallecimiento de su ascendiente.
- Que mediante Resolución GNR 193197 de 2015 COLPENSIONES le negó la pensión de sobrevivientes con el argumento que al momento de la muerte del pensionado no se encontraba afrontando las consecuencias de la invalidez, desconociendo su avanzada edad, la historia clínica y la dependencia económica con su padre.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtió **COLPENSIONES** el derecho pretendido e indicó frente a los hechos que acepta como cierto la fecha de nacimiento de la demandante, su parentesco de hija respecto del causante, la condición de invalida de la actora, la fecha de estructuración que le fue determina y el contenido de la Resolución que le negó la pensión de sobrevivientes. Respecto a los demás señala que no le constan o se trata de apreciaciones personales que serán objeto de debate probatorio.

1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Dentro del trámite de la **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**, llevada a cabo por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín el 5 de agosto de 2019, se **ABSOLVIÓ** a **COLPENSIONES** de todas las pretensiones formuladas en su contra por la señora **MARIA DEL SAGRARIO OCHOA BEDOYA**, a quien condenó en costas fijando las agencias en derecho en la suma de \$600.000.

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ

Señaló que conforme al artículo 47 de la Ley 100 de 1993, norma vigente la fecha de deceso del señor GABRIEL ANGEL OCHO, en su literal c) estipula que son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes los hijos inválidos si dependían económicamente del causante mientras subsistan las condiciones de invalidez y para determinar cuándo hay invalidez se aplica el artículo 38 de la misma norma. Y en el caso de autos el causante falleció el 25 de abril de 2011 y según el dictamen de pérdida de capacidad emitido por la Junta Regional de Calificación, la fecha de estructuración de la invalidez de la demandante fue el 21 de agosto de 2013, es decir, en fecha posterior al fallecimiento del pensionado. Y si bien en los hechos de la demanda se indica que esta fecha de estructuración no corresponde, lo cierto es que este es un tema técnico que no le compete al juez laboral, quien no tiene los conocimientos de tipo médico o científico para determinar cuándo hay una pérdida de capacidad laboral, sin que el dicho dictamen hubiera sido discutido o atacado a través de los recursos idóneos, por lo que el juez no puede apartarse del dictamen ya que se trata de una prueba técnica.

Por consiguiente, concluyó el a quo teniendo en cuenta la fecha de estructuración determinada en el referido dictamen es claro que la demandante para la de deceso del causante no era inválida y por tanto no se cumplen los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes deprecada, por lo que absolvió a la demandada de todas las pretensiones en su contra.

2.2. CONSULTA

Dentro del término otorgado por la Ley no se interpuso ningún recurso, y como la decisión fue absolutoria en contra del afiliado, el proceso fue remitido para surtir el grado jurisdiccional de

CONSULTA, según lo dispone el artículo 69 del CPT y SS modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007

2.3. ALEGATOS DE COLPENSIONES

La apoderada de la parte demandada solicita se confirme la sentencia absolutoria, toda vez que la demandante no cuenta con los requisitos necesarios para acceder a la prestación solicitada, conforme al literal c) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, modificadorio del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en razón a que a la fecha del deceso de su padre GABRIEL ANGEL OCHOA, esto es 25 abril de 2011, no tenía la calidad de invalida, dado que conforme a Dictamen de Pérdida de Capacidad Laboral se determinó que la accionante tenía un PCL del 52.87% de origen común estructurada el día 21 de agosto de 2013, es decir, que la merma de su capacidad laboral se dio con posterioridad al deceso de su padre.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Consiste en determinar si la demandante acreditó los requisitos para obtener la sustitución pensional por el fallecimiento de su padre, analizando si es dable apartarse del dictamen pericial que calificó la invalidez de la actora y determinar una fecha de estructuración diferente.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En primer lugar, debe aclararse que la normatividad aplicable al presente caso respecto a la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del fallecimiento del señor ALVARO DE JESÚS POSADA ECHEVERRI, hermano de la demandante, el cual ocurrió el 25 de abril de 2011, es decir, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que en su literal c), en lo que interesa al proceso, establece:

“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

(...)

c) (...) los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993; (...)”

Por consiguiente, para tener la calidad de beneficiaria de la prestación en condición de hija inválida, como ahora se pretende, se debe acreditar que la señora MARIA DEL SAGRARIO OCHOA tenía dicha condición al momento del deceso de su padre y que dependía económicamente de este para ese momento.

En el caso de autos, se encuentra debidamente acreditado conforme a registro civil de nacimiento visible a folio 20 que la demandante MARIA SAGRARIO OCHOA BEDOYA es hija del señor GABRIEL ÁNGEL OCHOA BEDOYA, quien era pensionado de Colpensiones, como lo acepta la entidad demandada en la Resolución GNR 193197 de 2015 (fl 130/131).

De otro lado, respecto al requisito de la invalidez, a folios 22/25 del plenario obra dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVÁLIDEZ, donde se le determinó una pérdida de capacidad laboral del 52.87% estructurada el 13 de agosto de 2014.

Lo que significa que la invalidez de la demandante se estructuró en fecha posterior al deceso de su padre ocurrido el 25 de abril de 2011, por lo que para el deceso de este no tenía la calidad de inválida.

A través del presente proceso se pretendía que se apartara de dicho dictamen y se estableciera que la invalidez de la señora MARIA DEL SAGRARIO OCHOA se estructuró antes de la muerte de su padre, alegando que desde el año 2001 está venía padeciendo dolores de espalda, hecho que se pretendió demostrar a través de la prueba testimonial.

Respecto a la fecha de estructuración de la invalidez, el Decreto 1507 de 2014, vigente para la fecha en que se elaboró el dictamen, estableció el Manual Único para la Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional y definió la fecha de estructuración como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado.

Por su parte, el **ARTÍCULO 41 de la Ley 100 de 1993** modificado por el artículo 142 del Decreto 19 de 2012, señala que:

“Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales- ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS,

determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. Contra dichas decisiones proceden las acciones legales.”

En éste sentido se destaca la importancia que tienen dichos conceptos, dado que éstos en principio constituyen el fundamento para que las entidades que administran el Sistema de Seguridad Social decidan sobre el reconocimiento y pago de determinadas prestaciones económicas a las que podría tener derecho el afiliado, sin que sea admisible, sin fundamento alguno, apartarse de su contenido, incluso un juez no estaría facultado para dictaminar en forma definitiva y **sin el apoyo de especialistas en la materia**, asuntos tan técnicos como la distribución porcentual que apareja una patología o la fecha de estructuración de la invalidez, toda vez que es un hecho que debe ser establecido científicamente, conocimiento que claramente escapa al resorte de las competencias de un operador jurídico.

Por consiguiente, es claro que cuando se presente inconformidad contra los dictámenes emitidos por las Administradoras de Fondo de Pensiones, las ARL o las Juntas de Calificación de Invalidez se pueden controvertir ante la justicia ordinaria, donde a través de una prueba pericial se puede establecer si efectivamente hay lugar a la modificación de los mismos.

Sin embargo, dentro del presente asunto, la parte actora no controvirtió en su momento el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez para que fuera revisado por la Junta Nacional y dentro de la presente demanda, si bien se alega que se debe modificar la fecha de estructuración, lo cierto es que no se allegó prueba alguna que permitiera al juez llegar a esta conclusión, pues no se aportó un dictamen o concepto de un médico especialista en la materia ni tampoco se solicitó que fuera decretada prueba pericial con dicho fin.

Por tanto, le asiste razón al a quo cuando indica que el juez no cuenta con los elementos técnicos para apartarse de las conclusiones dadas por la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, pues no es de resorte del operador jurídico examinar asuntos tan técnicos como este, precisamente se vale de especialistas en la materia para efectos de esclarecer los hechos objetos de controversia. Así lo consagra la ley estatutaria de administración de justicia, Ley 270 de 1996, cuando se refiere a la conformación de las listas de auxiliares como apoyo a los falladores dados sus conocimientos técnicos y científicos, con medios idóneos para la calificación a partir de un grupo interdisciplinario, de ahí que las juntas de calificación no sean las únicas facultadas para emitir dictámenes válidos al interior de un proceso judicial, ni se espere del fallador un análisis médico.

Por tanto, al no obrar ninguna prueba técnica que permita concluir que la fecha de estructuración que se le determinó a la actora no era la que le correspondía, esta Magistratura no cuenta con elementos para desconocer el concepto técnico, no siendo posible determinar una diferente, como lo pretende el apoderado de la parte actora, pues se insiste, el juez no tiene los conocimientos técnicos para ello, sin que este aspecto pueda determinarse a partir del dicho de los testigos o de conjeturas que no estén soportadas en la historia clínica o en exámenes diagnósticos.

Ahora, tampoco es válido el argumento del apoderado de la actora en su demanda que se debe determinar una fecha de estructuración de la invalidez anterior a la muerte del causante porque la demandante es una persona de la tercera edad que tiene múltiples patologías como lo son ARTROSIS BILATERAL DE RODILLAS, ESCOLIOSIS DEGENERATIVA, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, LUMBALGIA, RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTOS DE COLUMNA LUMAR Y GASTRITIS CRÓNICA, pues en primer lugar la edad por sí sola tampoco hace que una persona sea inválida, pues sería tanto como considerar que todas las personas de la tercera edad son inválidas. Además conforme se indica en el dictamen de la Junta Regional, la mayoría de las patologías de la actora son de carácter crónico o degenerativo, es decir, que se trata de enfermedades que con el paso del tiempo tienen a empeorar y hacer más evidentes sus síntomas y secuelas, por tanto, esta Magistratura no tiene elementos técnicos para determinar en qué momento esas enfermedades evolucionaron a tal punto que hicieron que la actora perdiera su capacidad laboral en un porcentaje superior al 50%, pues si bien pudo haberlas padecido desde hace tiempo, no necesariamente desde que empezaron sus síntomas fueron incapacitantes a tal punto que la hicieran una persona inválida.

Por consiguiente, es claro que tal y como lo estimó el a quo, al haberse determinado que la invalidez de la señora MARIA DEL SAGRARIO OCHOA BEDOYA se estructuró el 21 de agosto de 2013, es decir, con posterioridad al fallecimiento de su padre GABRIEL ÁNGEL OCHOA, ocurrido el 25 de abril de 2011, resulta evidente que no acredita los requisitos para beneficiarse de la pensión de sobrevivientes en los términos del literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003, ya que no tenía la condición de inválida para la muerte del causante.

En consecuencia, deberá CONFIRMARSE la decisión de primera instancia de absolver a la demandada de todas las pretensiones en su contra.

Sin costas en esta instancia..

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

DECIDE

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia proferida el 5 de agosto de 2019 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario promovido por la señora **MARIA DEL SAGRARIO OCHOA BEDOYA** identificada con c.c. **21.764.374** contra **COLPENSIONES**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará en **EDICTO**, que se fijará por la secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los Magistrados

(firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **MARIA DEL SAGRARIO OCHOA BEDOYA**
Demandado: **COLPENSIONES**
Radicado No.: **05001-31-05-016-2016-01328-01.**
Decisión: **CONFIRMA ABSOLUCIÓN**
Fecha de la sentencia: **27/07/2021**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 28/07/2021 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario